

**Gestión pública y transparencia financiera: Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial La Unión, periodo 2024**

**Public management and financial transparency: Decentralized
Autonomous Parish Government of La Union, Period 2024**

Sandra Patricia Toala Bozada¹
sandra.toala@unesum.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-0214-1897>
Universidad Estatal del Sur de Manabí

Gleise Nicole Garay Arias²
garay-gleise4788@unesum.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0005-8989-8981>
Universidad Estatal del Sur de Manabí

Como citar:

Toala Bozada, S. P., & Garay Arias, G. N. (2025). Gestión pública y transparencia financiera: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Unión, periodo 2024. *Revista Pulso Científico*, 3(3), 682–697. <https://doi.org/10.70577/rps.v3i3.78>

Fecha de recepción: 2025-07-18

Fecha de aceptación: 2025-09-03

Fecha de publicación: 2025-09-05

RESUMEN

El estudio se desarrolló en el GAD Parroquial La Unión y parte de la problemática identificada en la falta de transparencia en la planificación financiera, evidenciada en procesos poco claros, escasa participación ciudadana y limitaciones en la rendición de cuentas. El objetivo fue determinar cómo la gestión pública incide en la transparencia financiera para fortalecer la confianza ciudadana y la eficiencia en el uso de los recursos. Se aplicó una metodología con enfoque mixto, utilizando encuestas a los siete funcionarios del GAD, incluido el presidente, y una entrevista a profundidad, bajo un muestreo censal. Los resultados muestran que el 43% de los funcionarios considera que la gestión pública garantiza totalmente la transparencia, otro 43% parcialmente y el 14% indica que no la garantiza. En cuanto a la participación ciudadana, el 43% la percibe como mayoritaria, otro 43% parcial y el 14% casi inexistente. Respecto al cumplimiento normativo, el 43% afirma que siempre se cumple, otro 43% que se cumple ocasionalmente y el 14% rara vez. Además, el 57% considera que el presupuesto permite una rendición de cuentas parcial, el 29% totalmente y el 14% no la comprende. Se concluye que, aunque existen avances en la gestión pública y normativa vigente, persisten debilidades en la comunicación, capacitación y mecanismos de control, lo que limita la transparencia y la confianza de la comunidad.

Palabras clave: Gestión pública, finanzas, participación ciudadana, rendición de cuentas.

ABSTRACT

The study was conducted in the La Unión Parish Regional Government and addresses the identified problems of a lack of transparency in financial planning, evidenced by unclear processes, limited citizen participation, and limited accountability. The objective was to determine how public management impacts financial transparency to strengthen citizen trust and efficient use of resources. A mixed-method approach was applied, using surveys of the seven GAD officials, including the president, and an in-depth interview, using a census sample. The results show that 43% of officials believe that public management fully guarantees transparency, another 43% partially, and 14% indicate that it does not. Regarding citizen participation, 43% perceive it as majority, another 43% partial, and 14% almost nonexistent. Regarding regulatory compliance, 43% state that it is always met, another 43% that it is occasionally met, and 14% rarely. Furthermore, 57% believe the budget allows for partial accountability, 29% believe it allows for complete accountability, and 14% do not understand it. The conclusion is that, although there has been progress in public management and current regulations, weaknesses persist in communication, training, and oversight mechanisms, which limit transparency and community trust.

Keywords: Public management, finance, citizen participation, accountability.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, la gestión pública es un elemento esencial para promover la eficiencia, la equidad y la transparencia en la administración de los recursos públicos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2024), los gobiernos enfrentan el desafío de fortalecer la confianza ciudadana mediante la implementación de políticas que garanticen la rendición de cuentas y la correcta planificación financiera, evitando el mal uso de los fondos estatales. En este contexto, la transparencia se ha convertido en un pilar fundamental para prevenir la corrupción y asegurar que las decisiones presupuestarias estén alineadas con las necesidades reales de la sociedad.

Por otra parte, en América Latina, la situación presenta características particulares. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023), los países de la región han avanzado en la creación de marcos normativos orientados a la modernización de la gestión pública; sin embargo, persisten problemas relacionados con la falta de mecanismos de control y la baja participación ciudadana en los procesos financieros. Esto ha generado una brecha entre la formulación de planes estratégicos y su ejecución efectiva, lo que limita el desarrollo económico y social, especialmente en zonas rurales y de menor acceso a la información.

En el Ecuador, la Constitución y leyes como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establecen lineamientos claros para una gestión pública transparente y eficiente. No obstante, informes de la Contraloría General del Estado revelan que en muchos Gobiernos Autónomos Descentralizados aún se presentan deficiencias en la planificación y control financiero, lo que se traduce en retrasos en la ejecución de proyectos, subejecución presupuestaria y limitaciones en la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

En el ámbito local, el GAD Parroquial La Unión enfrenta retos significativos en la administración de sus recursos. Aunque se han desarrollado planes y programas para impulsar el desarrollo comunitario, se ha evidenciado la falta de transparencia en ciertos procesos de planificación financiera, lo cual afecta la confianza de la ciudadanía y limita el impacto positivo de los proyectos ejecutados. Esta situación se agrava por la escasa

participación ciudadana en la toma de decisiones y por la debilidad de los mecanismos de control interno.

En este contexto, surge la necesidad de analizar de manera profunda la relación entre la gestión pública y la transparencia financiera, con el propósito de determinar cómo la gestión pública incide en la transparencia de la planificación financiera del GAD Parroquial La Unión, contribuyendo así a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y promover un modelo de gobernanza más participativo y confiable.

Gestión pública en el Ecuador

En el Ecuador, la gestión pública se concibe como un proceso integral que busca garantizar el desarrollo social, económico y ambiental de la nación, a través de la administración eficiente y transparente de los recursos públicos. Según Paredes y Salazar (2023), la gestión pública ecuatoriana se ha transformado en las últimas décadas, pasando de un modelo centralista y burocrático a uno más descentralizado y participativo, en el cual los diferentes niveles de gobierno tienen competencias claramente definidas para responder a las necesidades de la ciudadanía. En este contexto, resulta indispensable que los procesos administrativos estén alineados con los principios de eficacia, eficiencia, equidad y responsabilidad, con el fin de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones públicas.

Por otra parte, el marco normativo que regula la gestión pública en el Ecuador se sustenta principalmente en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). En primer lugar, la Constitución, en su artículo 227, establece que la administración pública debe regirse por los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y participación ciudadana, siendo estos pilares fundamentales para garantizar una gestión responsable y orientada al bien común (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). Además, este marco constitucional promueve la descentralización como un mecanismo para acercar el poder y la toma de decisiones a las comunidades, fortaleciendo así la autonomía de los gobiernos locales.

En cuanto al COOTAD, este cuerpo legal define la estructura y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, estableciendo las bases para la organización territorial y la transferencia de responsabilidades desde el gobierno central hacia las entidades seccionales. Según López y Villacís (2022), el COOTAD fomenta la planificación participativa y el desarrollo local, asegurando que las políticas públicas se diseñen considerando las particularidades y prioridades de cada territorio. De igual forma, establece que los GAD tienen la obligación de promover procesos inclusivos que permitan la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, fortaleciendo así la transparencia y la gobernanza.

Por su parte, el COPLAFIP regula la planificación y la gestión de las finanzas públicas, constituyéndose en un instrumento clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la asignación de recursos. Este código establece los lineamientos para la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto público, asegurando que los recursos se destinen de manera adecuada y en concordancia con los objetivos estratégicos del Estado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). Además, promueve la articulación entre la planificación nacional, los planes locales y el presupuesto, evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando el uso de los fondos públicos.

En este marco legal, los Gobiernos Autónomos Descentralizados desempeñan un papel fundamental en la gestión pública, ya que son las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas a nivel local. Estos gobiernos se organizan en cuatro niveles: parroquial, cantonal, provincial y regional, cada uno con competencias específicas en áreas como la gestión ambiental, la infraestructura, la prestación de servicios básicos, el fomento productivo y la planificación territorial. Según Torres y Ramírez (2023), el rol de los GAD es crucial porque permiten atender de manera directa las necesidades de la población, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo el desarrollo sostenible de las comunidades.

Sin embargo, a pesar de los avances normativos, la gestión pública en los GAD enfrenta desafíos relacionados con la capacidad técnica y financiera, así como con la transparencia en la administración de los recursos. De acuerdo con la Contraloría General del Estado

(2024), algunos gobiernos locales aún presentan debilidades en la planificación presupuestaria y en los mecanismos de rendición de cuentas, lo que limita la efectividad de sus acciones y puede afectar la confianza de la ciudadanía. Por esta razón, resulta indispensable fortalecer los procesos de capacitación del talento humano y la implementación de sistemas de control interno que garanticen el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

Transparencia Financiera

La transparencia financiera se ha consolidado como un pilar fundamental dentro de la gestión pública moderna, ya que permite garantizar el uso adecuado y responsable de los recursos del Estado. Según Ramírez y Torres (2024), la transparencia financiera se entiende como el proceso mediante el cual se proporciona información clara, completa y accesible sobre la gestión de los fondos públicos, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y promover la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. En este sentido, la transparencia no se limita únicamente a la publicación de datos financieros, sino que implica la creación de mecanismos que permitan a la sociedad evaluar y fiscalizar las acciones de los gobernantes, asegurando así la legitimidad de las decisiones adoptadas.

Asimismo, de acuerdo con Mendoza (2023), la relevancia de la transparencia financiera en la gestión de fondos públicos radica en su capacidad para optimizar la asignación de recursos y prevenir prácticas ineficientes o irregulares. Cuando los gobiernos comunican de manera clara cómo se planifican, ejecutan y evalúan los presupuestos, se fomenta un entorno de confianza que incentiva la participación ciudadana y fortalece la gobernanza democrática. Además, la transparencia se convierte en un factor clave para garantizar la sostenibilidad fiscal, ya que permite identificar de manera oportuna riesgos financieros y adoptar medidas correctivas que aseguren el equilibrio entre ingresos y gastos.

Por otra parte, la transparencia financiera funciona como un mecanismo de control social y de lucha contra la corrupción. Según Villacís y Andrade (2022), la corrupción representa uno de los principales problemas que afectan la credibilidad de los gobiernos y el desarrollo de los países, pues genera pérdidas significativas de recursos que deberían destinarse a satisfacer las necesidades básicas de la población. En este contexto, la transparencia actúa como una herramienta preventiva, al brindar información que permite a la ciudadanía y a

los organismos de control supervisar la correcta utilización de los fondos públicos. A través de la rendición de cuentas, la sociedad tiene la posibilidad de exigir explicaciones a las autoridades sobre sus decisiones financieras, reduciendo así las oportunidades de prácticas corruptas y fortaleciendo la ética pública.

De igual manera, organismos internacionales como Transparencia Internacional han desarrollado indicadores que permiten medir el grado de apertura y control en la administración pública. Uno de los más reconocidos es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que evalúa la percepción de corrupción en el sector público de diferentes países. Según el informe de Transparencia Internacional (2024), aquellos países que presentan mayores niveles de transparencia suelen registrar mejores resultados en desarrollo social y económico, debido a que la confianza en las instituciones facilita la inversión y el crecimiento sostenible. Estos indicadores no solo sirven como instrumentos de evaluación, sino también como guías para implementar políticas públicas orientadas a la mejora continua de la gestión financiera.

En el caso de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023) señala que la región enfrenta desafíos significativos en materia de transparencia, especialmente relacionados con la limitada participación ciudadana y la falta de acceso oportuno a la información. Sin embargo, también destaca avances importantes, como la creación de plataformas digitales de gobierno abierto, que permiten a los ciudadanos consultar en tiempo real la ejecución presupuestaria y otros aspectos vinculados a la gestión de los recursos públicos.

En el Ecuador, la transparencia financiera está respaldada por instrumentos legales como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), los cuales establecen la obligación de las instituciones estatales de publicar información clara y detallada sobre el uso de los recursos. No obstante, estudios recientes de la Contraloría General del Estado (2024) evidencian que aún existen brechas en la implementación de estas normativas, especialmente en los niveles locales de gobierno, donde la falta de capacitación técnica y tecnológica limita la efectividad de los procesos de rendición de cuentas.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación se adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, lo que permitió analizar tanto la ejecución administrativa como las percepciones de los funcionarios respecto a la transparencia y la eficiencia en el manejo presupuestario. Esta aproximación facilitó la recolección de información integral, que sirvió como base para la toma de decisiones y la propuesta de mejoras en los procesos de planificación financiera.

En cuanto a los métodos, se aplicaron varios enfoques complementarios que permitieron una comprensión profunda de la problemática. El método inductivo permitió generar conclusiones generales a partir de casos específicos relacionados con la distribución de recursos y los procesos de control interno. El método deductivo se empleó para partir de principios teóricos y normativos sobre gestión pública y transparencia, formulando hipótesis que luego fueron contrastadas con la información recolectada. Con el método analítico, se descompuso la planificación financiera en sus fases para evaluar cómo cada una influía en la transparencia. Posteriormente, mediante el método sintético, se integraron los hallazgos obtenidos para construir una visión integral de la gestión pública y su impacto en la transparencia financiera. Por su parte, el método descriptivo permitió caracterizar de manera detallada los procesos administrativos y las percepciones de los funcionarios, ofreciendo una visión objetiva de la situación institucional.

En relación con las técnicas de recolección de datos, se utilizaron instrumentos adecuados para recopilar información cuantitativa y cualitativa. La encuesta se aplicó a los siete funcionarios del GAD, incluido el presidente, mediante un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escalas de Likert, lo que permitió identificar percepciones sobre transparencia y efectividad en la gestión. Además, se realizó una entrevista al presidente, basada en preguntas abiertas que abordaron temas como planificación financiera, control de recursos y rendición de cuentas, lo que facilitó obtener información profunda y detallada para el análisis cualitativo.

En lo que respecta a la población, estuvo conformada por los siete funcionarios que integran el GAD Parroquial La Unión, quienes poseen conocimiento directo sobre la administración de recursos y procesos presupuestarios. Dado el tamaño reducido de la población, se empleó

un muestreo censal, lo que implicó incluir a todos los miembros, asegurando la obtención de datos completos, confiables y sin sesgos. Esto permitió reflejar con precisión la realidad administrativa y evaluar de manera integral la incidencia de la gestión pública en la transparencia financiera.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La siguiente tabla presenta los indicadores clave obtenidos de la entrevista realizada al presidente del GAD Parroquial La Unión, los cuales reflejan aspectos relacionados con la gestión pública, la planificación financiera y la transparencia en el uso de los recursos. Esta información resume las percepciones y prácticas institucionales que permiten evaluar el funcionamiento administrativo y su impacto en la comunidad.

Tabla 1

Entrevista al presidente del GAD Parroquial La Unión

Indicador	Respuesta
Incidencia de la gestión pública en la planificación financiera	Una gestión pública eficiente permite una planificación ordenada, transparente y enfocada en las necesidades reales de la comunidad.
Mecanismos utilizados para la planificación financiera transparente	Se emplean el POA, el PDOT, actas de participación ciudadana e informes presupuestarios presentados en asambleas.
Nivel de participación ciudadana en la planificación	Se promueve participación activa mediante convocatorias abiertas, priorización conjunta de proyectos y rendición de cuentas directa.
Dificultades en la vinculación de gestión pública y planificación financiera	Existen limitaciones por falta de capacitación técnica y escasa comprensión de procesos por parte de la comunidad.
Leyes fundamentales que rigen la gestión parroquial	COOTAD, Ley Orgánica de Finanzas Públicas y Normas de Control Interno de la Contraloría.

Aplicación de normativas en la planificación y administración de recursos	Normativas guían la elaboración del presupuesto, ejecución de obras, contrataciones y rendición de cuentas.
Instituciones que supervisan el cumplimiento normativo	Contraloría, Ministerio de Finanzas, Consejo Nacional de Planificación y veeduría ciudadana.
Impacto del marco normativo en la gestión pública	Facilita la gestión, pero su rigidez y falta de recursos técnicos dificultan su aplicación.
Procedimiento para la elaboración del presupuesto anual	Se basa en el POA, prioridades comunitarias y techos presupuestarios definidos por entidades superiores.
Estrategias para garantizar la transparencia del presupuesto	Publicación de informes, asambleas ciudadanas, auditorías internas y externas.
Relación entre planificación presupuestaria y rendición de cuentas	Una buena planificación facilita una rendición de cuentas clara, medible y verificable por la comunidad.
Correspondencia del presupuesto con las necesidades de la parroquia	Aunque los recursos son limitados, se priorizan las necesidades urgentes mediante participación ciudadana.

Nota. Compilación de los resultados de la entrevista aplicada al presidente de la institución.

Los resultados de la entrevista evidencian que en el GAD Parroquial La Unión se promueve una planificación financiera basada en la participación ciudadana y en el uso de herramientas como el POA y el PDOT, lo que coincide con el estudio de Martínez y Ramírez (2023), quienes destacan que la inclusión comunitaria fortalece la transparencia y la legitimidad de la gestión pública.

Sin embargo, se identifican limitaciones relacionadas con la falta de capacitación técnica y la escasa comprensión de los procesos por parte de algunos funcionarios y ciudadanos, situación similar a la descrita por López (2022), quien afirma que la carencia de conocimientos administrativos dificulta la correcta aplicación de las normativas vigentes.

Además, la entrevista resalta la importancia de las auditorías y rendición de cuentas como mecanismos de control, lo que concuerda con el análisis de Torres (2024), quien sostiene

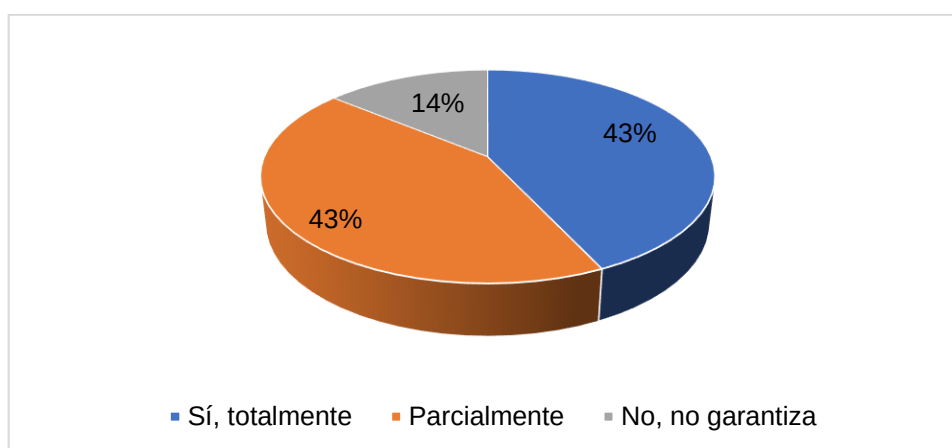
que estas prácticas son esenciales para prevenir actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.

Aunque los recursos económicos son limitados, se evidencia un esfuerzo por priorizar las necesidades urgentes, lo que guarda relación con el planteamiento de la CEPAL (2023), que subraya la necesidad de una gestión eficiente y equitativa para atender las demandas locales de manera estratégica.

Encuestas a los funcionarios del GAD Parroquial La Unión

Figura 1

Gestión pública y transparencia financiera

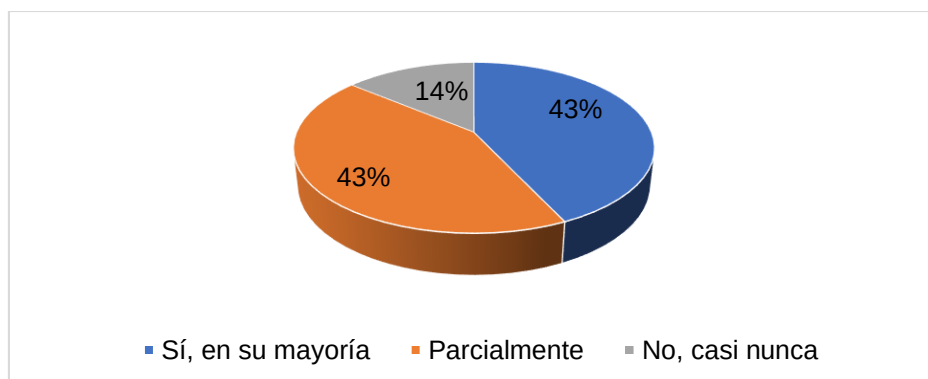


Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La Unión.

Los resultados reflejan que la mayoría de los funcionarios perciben que la gestión pública del GAD garantiza transparencia en la planificación financiera, aunque de manera parcial, con un 43% que la considera totalmente transparente y otro 43% que la percibe parcialmente. Esto evidencia avances en los procesos de planificación, pero también la necesidad de fortalecer mecanismos de control y rendición de cuentas. Este resultado coincide con lo expuesto por Martínez y Ramírez (2023), quienes señalan que la transparencia depende tanto de la correcta aplicación de normativas como de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Figura 2

Participación ciudadana en la planificación financiera

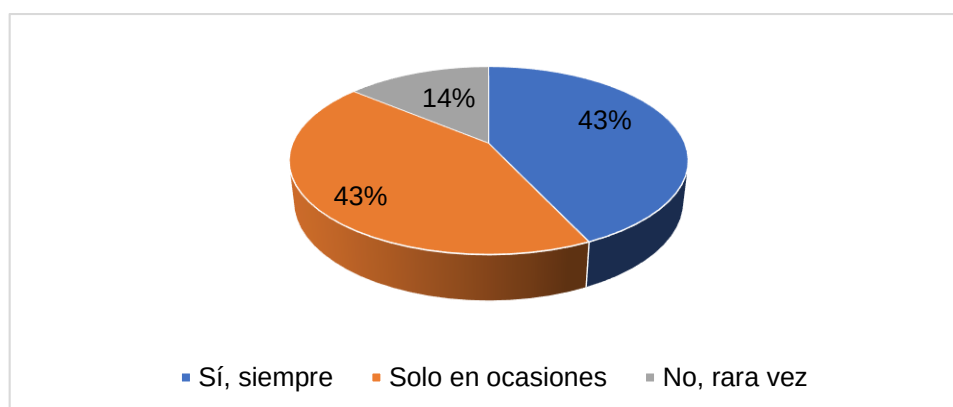


Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La Unión.

Los resultados muestran que el 43% de los funcionarios considera que la gestión pública promueve la participación ciudadana en su mayoría, mientras que otro 43% opina que se da de manera parcial y un 14% señala que casi nunca ocurre. Esto indica que, aunque existen esfuerzos por incluir a la comunidad en la planificación financiera, todavía persisten limitaciones que afectan su efectividad. Este resultado coincide con lo planteado por Torres (2024), quien sostiene que la participación ciudadana es clave para la transparencia, pero requiere procesos de convocatoria y comunicación más sólidos para garantizar una verdadera incidencia en la toma de decisiones.

Figura 3

Cumplimiento normativo en la administración de recursos

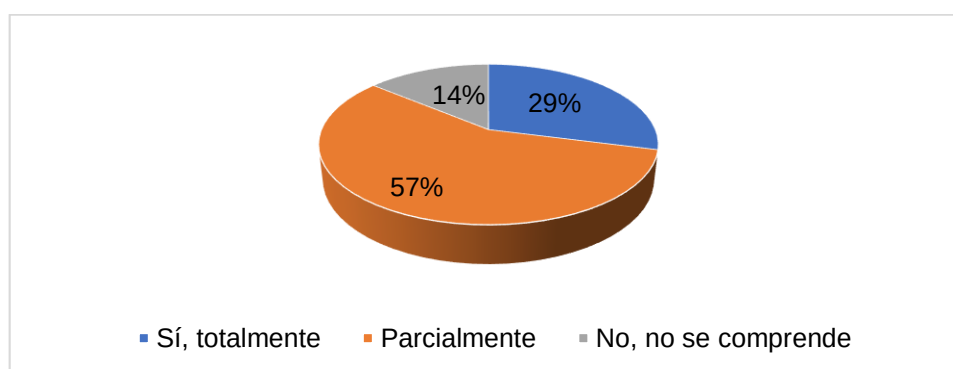


Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La Unión.

Los resultados evidencian que el 43% de los funcionarios considera que las normas legales se cumplen siempre en la administración de recursos del GAD, mientras que otro 43% señala que se cumplen solo en ocasiones y un 14% indica que rara vez se respetan. Esto refleja que, aunque existe un marco normativo establecido, su aplicación no es constante, lo que puede generar riesgos en la transparencia y eficiencia de la gestión. Este hallazgo coincide con lo señalado por López (2023), quien afirma que la correcta administración de recursos depende de la aplicación continua de las normativas y de la supervisión adecuada por parte de los organismos de control.

Figura 4

Presupuesto anual y rendición de cuentas



Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La Unión.

Los resultados muestran que el 57% de los funcionarios considera que el presupuesto anual permite una rendición de cuentas solo de manera parcial, mientras que el 29% afirma que es totalmente claro y el 14% señala que no se comprende. Esto evidencia que, aunque existen avances en la presentación de la información, todavía se requiere mejorar la claridad y accesibilidad de los reportes financieros. Este resultado coincide con lo planteado por Torres (2024), quien sostiene que una rendición de cuentas efectiva depende de la simplificación de la información y de estrategias que faciliten la comprensión ciudadana para fortalecer la transparencia.

CONCLUSIONES

Se determinó que la gestión pública del GAD Parroquial La Unión incide de manera directa en la transparencia de la planificación financiera, ya que una administración eficiente y

organizada permite una distribución de recursos más clara, orientada a las necesidades prioritarias de la comunidad, fortaleciendo la confianza ciudadana.

Se evidenció que, aunque existe un marco normativo sólido que regula los procesos administrativos y financieros, su aplicación no es constante debido a limitaciones técnicas y falta de capacitación, lo que genera riesgos en la transparencia y dificulta la ejecución óptima de los recursos públicos.

Se concluyó que la rendición de cuentas y la participación ciudadana se promueven parcialmente, pues si bien se realizan asambleas y espacios informativos, aún persisten debilidades en la comunicación y comprensión de la información financiera, lo que limita la vigilancia y el control social por parte de la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). *Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)*. Registro Oficial Suplemento 306. <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO-ORGANICO-DE-PLANIFICACION-Y-FINANZAS-PUBLICAS.pdf>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)*. Registro Oficial Suplemento 303. <https://www.asambleanacional.gob.ec>
- Contraloría General del Estado. (2024). *Informe anual de control gubernamental 2024*. <https://www.contraloria.gob.ec>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2023: Desafíos de la política fiscal en tiempos de incertidumbre*. Naciones Unidas. <https://www.cepal.org>
- López, M. (2022). Transparencia y control en la administración pública: retos para los gobiernos locales. *Revista Gestión Pública y Control*, 8(2), 45-58. <https://doi.org/10.32719/gestionpublica.2022.8.2.45>

- Martínez, P., & Ramírez, A. (2023). Participación ciudadana y transparencia en la gestión pública local. *Revista Latinoamericana de Políticas Públicas*, 15(1), 33-50.
<https://doi.org/10.22201/rlpp.2023.15.1.33>
- Ramírez, J., & Torres, D. (2024). Gestión pública y transparencia financiera: desafíos y perspectivas. *Revista Internacional de Administración y Finanzas*, 12(3), 77-91.
<https://doi.org/10.20420/administracion.2024.77>
- Torres, G. (2024). La rendición de cuentas como herramienta de control social en gobiernos descentralizados. *Revista de Políticas y Administración Pública*, 19(2), 115-130.
<https://doi.org/10.52945/rpap.2024.19.2.115>
- Transparencia Internacional. (2024). *Índice de percepción de la corrupción 2024*.
<https://www.transparency.org>
- Villacís, F., & Andrade, L. (2022). Mecanismos de prevención de la corrupción en la gestión pública. *Revista Iberoamericana de Estudios Gubernamentales*, 10(1), 91-105.
<https://doi.org/10.31410/rieg.2022.10.1.91>

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

Financiamiento:

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

Nota:

El artículo no es producto de una publicación anterior.